

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por el C. Mariano Martínez, contra el C. Jefe político de Zimapan, como ejecutor de la Orden del Gobierno de ese Estado, relativo á que Martínez entregase la oficina de que estaba encargado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe, alegando en el juicio de amparo promovido por

menos la del artículo 14, por que es claro, que con so de su competencia, no ha alguna con efecto retróactivo. infringido en el caso la fracción 35 de la propia Constitución, que tiene el poder ser votado para los cargos populares, por que el de Distrito no es de elección popular, que no lo confiere el pueblo, es, con aprobación del Gobierno, el uso de ese derecho de las leyes que lo reglamentan, que no siempre los entran en importan una violación manifiesta, por las que no concedo el recurso de am-

consideraciones que por obviar sesario ampliar, el Promotor ando al Juzgado se sirva de Justicia de la Union no amariano Martínez, por no violados reclamados, la garantía del artículo 14 de la Constitu-

Julio 10 de 1871.—I. Duran.

estas, que son la ley de la materia, vigente en el Estado, los cargos de Diputados de minería deben ser bienales, y cada año solo se hace la renovación de la mitad de los miembros de las Diputaciones, como es de verse en los artículos 89, tit. 29, y la calificación de esas elecciones corresponde al Gobierno, conforme al artículo 14 del título estado.

De aquí se infiere, que el Gobierno al reprobado los actos de la junta de mineros de Zimapan que había usurpado facultades que la ley le niega, obró en la órbita de sus atribuciones legales y no violó en consecuencia, ninguna de las garantías que la Constitu-

el C. Mariano Martínez, dice: que habiendo este sido electo Diputado de minería, por una junta de mineros que tuvo lugar en Zimapan el día 28 de Febrero último, por haber reprobado esa elección el Gobierno del Estado, y por haber ejecutado las órdenes y disposiciones relativas la autoridad política de aquel mineral, el quejoso ha creído que con tales procedimientos se ha violado en su persona la garantía del artículo 14, y se ha infringido el 35 fracción 29 de la Constitución federal.

Perfectamente aclarados los hechos con el informe justificado que la autoridad ejecutora ha rendido, resulta: que en efecto, el quejoso fué nombrado primer Diputado propietario para aquella Diputación territorial de minería; pero de las actas respectivas y de los demás documentos que con el informe se presentaron, aparece también la circunstancia muy atendible é importante, de que, para que la junta hiciera la elección que recayó en la persona del promovente, tuvo que declarar nulas las verificadas en el año anterior; que eliminar á los Diputados que empezaron á funcionar el año pasado con conocimiento del Gobierno y reconocimiento de sus actos, por lo que debían continuar en el presente y tuvo la misma junta que hacer una renovación total de la Diputación, todo con infracción de las ordenanzas de minería, pues segun

ción asegura, que se designa resolver un expedido Rey. Tampoco se h cion 29 del a titucion, ó su ciudadano de gos de electo putado de m lar, supuesto sino los mine no, ni es son con desprecie tan; á lo que actos que lo cion de gran la Constituci paro.

Por tales no parece no concluye pít clarar: que la para al C. A laise con los que designa cion federal.

Pachuca,

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Julio 13 de 1874.—Visto este juicio promovido por el C. Mariano Martínez, pidiendo amparo y protección, contra un acuerdo del Gobierno de este Estado, fecha 21 de Marzo último, (fojas 24) por el que modificó las elecciones de Diputados de minería del Distrito de Zimapan, verificadas el 23 de Febrero del corriente año, (fojas 19) reprobando principalmente la del quejoso para Diputado propietario, con cuya providencia, asegura el C. Martínez, haberse violado en su persona las garantías que la Constitución general otorga en sus artículos 14 y 33 fracción 2ª, y

Considerando, 1ª: Que el Gobierno ha obrado, al dictar el acuerdo de que se trata, dentro de la órbita de sus facultades, supuesto que el artículo 14 tít. 11 de las ordenanzas de minería, lo autoriza para calificar esta clase de elecciones.

2ª: Que no solo no aparece que al usar de esta facultad hubiera procedido arbitrariamente, sino que consta de autos, que la apoyó en la circunstancia de que la elección de Martínez era ilegal, por que aún no había expirado el periodo en que conforme al artículo 8º del mismo título, debía funcionar como propietario el Diputado electo el año de 1873, cuya elección no fué reprobada por el mismo Gobierno á quien corresponde hacerlo.

3ª: Que no hay en consecuencia violación de garantías, y sí parece que el C. Martínez ha promovido temerariamente este juicio, haciéndose por ello acreedor á la multa de 100 pesos, establecida por el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869; este Juzgado de Distrito definitivamente juzgando, falla. 1ª: Que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Mariano Martínez, contra el acuerdo de que se ha hecho mérito; y 2ª: No se impone la expresada multa de 100 pesos, por parecer corresponder exclusivamente á la Suprema Corte, la facultad de aplicarla.

Hágase saber; publíquese, compúlsense las copias respectivas para el Semanario Judicial, y remítanse estos autos para su revisión.

Así sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo.—Doy fé.—*M. Mejía.*—*Francisco Briseño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 20 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por el C. Mariano Martínez, contra el C. Gefe político de Zimapan, como ejecutor de la orden del Gobierno del Estado de Hidalgo, relativo á que Martínez entregase la oficina de que estaba encargado como Diputado en ejercicio de la Diputación territorial de Zimapan, cuya orden, en concepto del quejoso, vulnera en su persona las garantías á que se refieren los artículos 14 y parrafo 2º del 35 de la Constitución general.

Considerando: que segun aparece en el expediente, la orden indicada la dictó el Gobierno del Estado de Hidalgo, en virtud de no haber aprobado la elección que la Junta de mineros de Zimapan hizo en 23 de Febrero último, para funcionarios de la Diputación territorial, en cuya elección resultó elegido el quejoso y por ella se encargó de la oficina que se le ha mandado que entregue.

Que segun las ordenanzas del ramo, está en la facultad del Gobernador del Estado, aprobar ó no elecciones como la de que se trata.

Que en consecuencia no puede decirse con razon, que la orden de entrega de la oficina de la Diputación territorial, ataque la garantía á que se refiere el artículo 14 de la Constitución general; puesto que aprobar ó reprobear con facultad legal un acto, y determinar en el caso de reprobación que

no siga surtiendo efectos, no envuelve un efecto retroactivo.

Que obrando como obró dentro de la órbita de sus facultades el Gobierno del Estado de Hidalgo, al reprobar la eleccion á que Martinez debió ser elegido Diputado en ejercicio, tampoco importa un ataque á la garantía á que se refiere el párrafo 2º del artículo 35 de la misma Constitucion general, por que las elecciones, empleos y comisiones á que se refiere, son de diversa naturaleza de la eleccion, que en la Junta de mineros verificada en Zimapan el 23 de Febrero de este año, recayó en la persona del quejoso.

Considerando, por último: que él no ha tenido motivo alguno digno de ser atendido para interponer este amparo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitucion general, y en el 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

Primero: que se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 13 del mes próximo pasado por el Juez de Distrito de Hidalgo, en la parte que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Mariano Martinez, contra la Orden de que se ha hecho mérito.

Segundo: que se condena al quejoso al pago de una multa de cien pesos.

Tercero: que se devuelvan sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; sacándose además copia igual para su publicacion en los periódicos.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto de los puntos 1º y 3º, y por mayoría respecto del 2º, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Gusman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, 11 de Setiembre de 1874.—*Luis María Aguilar, secretario.*

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Zacatecas, contra D. Sotero de la Torre, por peculado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice:

Que á fin de cumplir el superior auto de 12 de Abril del presente año, del Tribunal de Circuito de Guadalajara, que dispuso se perfeccionara la averiguacion criminal, sobre otro de los demas motivos porque en la presente causa se ha procedido contra D. Sotero de la Torre, sin formularle el cargo correspondiente, por la entrega que hizo de \$18,753 20 es. á las fuerzas pronunciadas en esta Capital en Enero de 1870, ni ocupándose por tanto el defensor del reo de tratar el motivo expresado, ni el Juzgado de resolverlo; y habiéndose presentado voluntariamente D. Sotero de la Torre, en 14 de Agosto último, previa la notificacion del superior auto de 12 de Abril, puesto en prision en el hospital civil, se le ampleó su declaracion sobre el motivo y con que autorizacion continuó despues del pronunciamiento de 8 de Enero de 1870, con la oficina del papel sellado abierta, sin haber asegurado las existencias en efectos y caudales, y permanecido en esta Capital ocupada por García de la Cadena y sus fuerzas, continuó en el empleo, no pareciendo la fuerza fisica que lo hicieran, mas que el amago de la destitucion; por cuya causa, entregó al interventor nombrado por García de la Cadena, \$17,753 20 es. y sin ninguna razon, mil pesos á D. Rafael Fernuza, que se titulaba Gobernador interino del Estado, segun consta de los documentos de fojas 10, 11 y 12, y de la comunicacion inserta en el testi-